

C.A. de Copiapó

Copiapó, veintinueve de junio de dos mil veintidós.

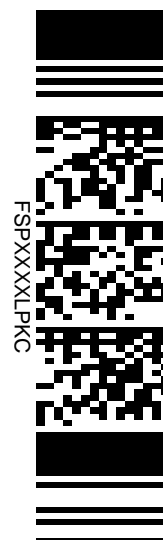
VISTOS:

El Juzgado Laboral de Copiapó, en procedimiento especial, de disolución de Sindicato, cuyo denunciante es la Inspección Provincial de Copiapó y el denunciado el Sindicato de Trabajadores de Empresa Minera Compañía Maricunga, RIT 0-48-2022, ruc 22-4.0384253-3, por sentencia pronunciada con fecha cinco de abril de dos mil veintidós, por la jueza titular, doña Fabiola Elena Villalón Gallardo, resolvió lo siguiente:

“I.- **Que SE HACE LUGAR** al requerimiento de disolución de sindicato, presentado don JOSE MIGUEL SAGREDO SANHUEZA, Inspector Provincial del Trabajo de Copiapó que se declare la disolución organización sindical denominada TRABAJADORES DE EMPRESA COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA”, R.S.U. 03010203, todos ya individualizados y se ordena su liquidación en caso de verificarse la existencia de bienes, para tal caso deberá requerirse la designación del liquidador en la oportunidad respectiva.

II.- Que no se condena en costas a la entidad requirente, por estimarse que ha tenido motivo plausible para litigar.”

Por la parte denunciada, el abogado don **Juan Alexis Castillo Peña**, dedujo recurso de nulidad contra el referido fallo, fundado primeramente en la causal prevista en el artículo 477 del Código del Trabajo, pues en la dictación de la sentencia se incurrió en infracción de ley que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo; luego -debiendo entenderse en subsidio de la anterior-, invoca la causal prevista en el artículo 478 letra b) del mismo Código, esto es, esto es, cuando la sentencia haya sido pronunciada con infracción manifiesta de las normas sobre la apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica; finalmente, en subsidio de las causales anteriores, esto es, las del 477, y 478 letra b), invoca además, la causal del artículo 478 letra e) del Código del Trabajo, al estimar infringido por el fallo los números 5 y 6 del artículo 459 del mismo Código, que



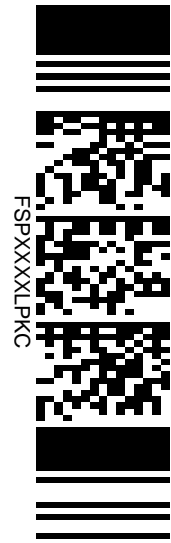
establece el contenido de las sentencias, por haber otorgado más de lo pedido por las partes, toda vez que, sin que ninguna de las partes lo pidiera como defensa o excepción, resolvió arbitrariamente que no existió práctica antisindical, no obstante que el mismo tribunal conoce de una causa acogida a tramitación la Rol S1-2022, la que está en tramitación.

El recurso de nulidad fue declarado admisible, procediéndose a su vista el día 24 de junio de 2022, interviniendo por la recurrente, don Juan Castillo Peña; por la recurrida, la Inspección del Trabajo de Copiapó, don Claudio Aguilar; y por el tercero coadyuvante Empresa Compañía Minera Maricunga, don Raimundo Mira, quedando los autos en estudio, para posteriormente pasar al estado de acuerdo.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que antes de entrar al estudio del recurso interpuesto, debe tenerse presente que el recurso de nulidad es un medio de impugnación de derecho estricto, al cual la ley le impone exigencias que deben ser cumplidas por la parte recurrente, sin dejar de considerarse que se está atacando la validez de un fallo y no lo que el recurrente pueda estimar como su justicia. En otras palabras, no se trata solamente que la resolución del tribunal a quo no sea del agrado o cause agravio a quien recurre, sino que en su pronunciamiento deben haberse obviado los requisitos que la ley impone, razón por la cual esta Corte debe limitarse en su actuar a verificar la existencia de las hipótesis de nulidad invocadas por el impugnante y, sólo en la medida que las misma se configuren, se podrá anular la sentencia y dictarse el fallo de reemplazo que se solicita por el recurrente.

SEGUNDO: Que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 477 del Código del Trabajo, tratándose de sentencia definitiva sólo será procedente el recurso de nulidad, cuando aquella se hubiere dictado con infracción de ley que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, por lo que dicho recurso debe sustentarse en dos categorías de causales: la primera de ellas, de carácter genérica, consagrada en el artículo 477 del Código del Trabajo, consistente en infracción sustancial de derechos constitucionales o



en infracción de ley que hubiese influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo; y la segunda, de carácter específica, prevista en las diferentes letras del artículo 478 del mismo texto legal, pudiendo invocarse distintas causales, conjunta o subsidiariamente, pero cada una de ellas fundamentada de manera concreta y coherente con el vicio denunciado.

TERCERO: Que las peticiones concretas del recurrente en su recurso de nulidad es que esta Corte anule dictando la correspondiente sentencia de reemplazo, en la cual se rechace la demanda de disolución del Sindicato tantas veces mencionado, con costas como lo solicitó al contestar la demanda.

1.- De la causal principal, artículo 477 del Código del Trabajo

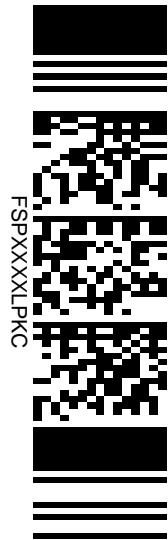
CUARTO: Este artículo 477 al decir del autor , don Omar Astudillo, en su obra “El recurso de nulidad laboral, Algunas consideraciones técnicas”, implica una confrontación de la sentencia con la ley que regula el caso, quien añade que “(...) toda sentencia es fundamentalmente la expresión de un silogismo- en verdad adopta la forma de una cadena de silogismos-, donde la deficiencias a que se refiere el motivo de nulidad atingen a la premisa mayor (la norma jurídica) y a la conclusión o consecuencia(resultado de la aplicación) que surge de la subsunción de los hechos probados (premisa menor) en el enunciado legal”.

En este proceso de aplicación de la ley, se controla su correcta aplicación por medio de la causal invocada por el recurrente, norma legal que implica la existencia de las siguientes hipótesis:

1.- Contravención formal del texto de ley, ello significa una abierta transgresión de la norma, lo que comporta su falta de acatamiento.

2.- Falta de aplicación: Ocurre cuando se deja de aplicar la ley no obstante que es llamada a resolver el asunto, puede estimarse que es un desconocimiento o ignorancia de la regla.

3.- Aplicación indebida, se verifica cuando la ley es aplicada a un caso para el que no ha sido prevista.



4.- Interpretación y aplicación errónea, tiene lugar cuando se asigna a la ley un sentido (significado) distinto al que debe

Corresponder, es decir, no se la entiende; o bien cuando le es atribuida un alcance (finalidad) diferente del que se busca a través de ella. Esto puede tener lugar tanto si se amplía como si se restringe equivocadamente su significación, su “espíritu”, la “ratio” o el objeto perseguido por la norma.

La causal de nulidad en estudio, requiere además, que el error de derecho cometido tenga influencia “sustancial” en la decisión. Ello quiere decir que debe existir una relación de causa a efecto entre el error producido y la decisión adoptada por el juez.

Para verificar la concurrencia de este requisito se debe acudir al procedimiento de la “supresión mental hipotética” o de exclusión del error, es decir, ha de hacerse un ejercicio intelectual para comprobar si la resolución del asunto habría sido diferente, de no haber mediado la incorrección denunciada.

Esta causal del artículo 477 del Código Laboral conlleva la exigencia de aceptar los hechos, tal y como han sido determinados en el fallo, es decir, su intangibilidad.

El cuestionamiento del recurrente debe dirigirse al proceso de interpretación y de aplicación de la ley, en relación a los hechos que se han tenido por probados y del modo que se los ha tenido por demostrados, esto es, conforme al caso concreto.

QUINTO: Del examen del libelo invalidatorio, surge de inmediato que la la parte recurrente, no ha hecho mención a una norma legal sustantiva que se haya infringido por la señora jueza y por ende, que haya influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

En efecto, solo se limita a mencionar lo dispuesto en el artículo 297 del Código Laboral relativo a los requisitos para solicitar la disolución de un Sindicato, sin que explique de modo alguno, cuál o cuáles son las normas



legales cuya aplicación por la juzgadora estaría en abierta infracción con el derecho.

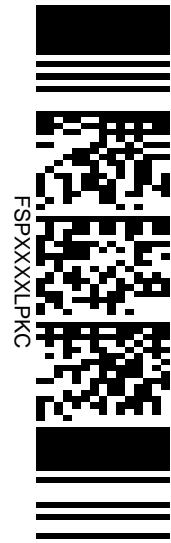
Ello ya implica que el motivo de invalidación invocado, como causal principal, está formalmente mal interpuesto al carecer de la correcta y necesaria mención de la o las normas legales que se suponen por la peticionaria que estarían infringidas por la sentencia cuya anulación se pide.

SEXTO: Para fundamentar su recurso, en lo concerniente a esta causal principal, el recurrente se limita a sostener, en síntesis, que su parte, el Sindicato de Trabajadores de Empresa Compañía Minera Maricunga, en el desarrollo del juicio, habría demostrado la existencia de incumplimiento grave de las obligaciones que la ley impone tanto a la Inspección del Trabajo como a la sentenciadora, incurriendo ambos, en infracción a la norma del artículo 297 del Código del Trabajo.

SÉPTIMO: Que del análisis de la argumentación expuesta en el recurso respecto de la causal invocada, queda establecido para estos sentenciadores que el recurrente no desarrolló fundamentación alguna en su libelo indicando en forma precisa la manera cómo se habría producido la infracción de ley que denuncia, hecho que fue advertido también por el abogado de la parte reclamada en su alegato en estrados, resultando imposible para estos sentenciadores pronunciarse respecto de la existencia de alguna infracción de ley al dictarse la sentencia recurrida, no pudiendo escudriñarse para establecer y declarar si se ha producido una aplicación indebida de una norma, o si se ha producido una interpretación y aplicación errónea de algún texto legal, de tal manera que solo cabe rechazar el recurso de nulidad fundado en dicha causal.

II.- Causal del Artículo 478 letra b)

OCTAVO: El libelo de marras, funda su medio de impugnación como segunda causal, subsidiaria de la principal, la hipótesis contemplada en la letra b) del artículo 478 del Código del Trabajo, al haberse pronunciado la sentencia con infracción manifiesta de las normas sobre apreciación de la



prueba conforme a las reglas de la sana crítica, conforme lo estatuye el artículo 456 del mencionado cuerpo laboral.

NOVENO: Que, en el caso en comento, la causal del artículo 478, letra b) del Código del Trabajo, dice relación con la razonabilidad de la sentencia, toda vez que al exigir la ley la valoración de las pruebas conforme a las reglas de la sana crítica, entendida ésta como: *“...el conjunto de reglas del correcto entendimiento humano, contingentes y variables con relación al tiempo y al lugar, estables y permanentes en razón de los principios en que debe de apoyarse...”*, ella no puede contradecir los parámetros que la conforman, a saber, los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, que constituyen las bases de un correcto raciocinio, debiendo tratarse, por lo demás, para el caso del procedimiento laboral, de una infracción **“manifiesta”**, es decir, debe entenderse que los hechos sobre los que se sustenta la sentencia recurrida aparecen desprovistos de todo sustento en la prueba o deben estar controvertidos por ella, de forma tal que no sea posible entender, a la luz de la lógica, la decisión alcanzada. En este sentido, debe recordarse que el recurso de nulidad no puede servir para volver a discutir sobre el mérito de la prueba rendida y su valoración.

DÉCIMO: Que, a mayor abundamiento, es necesario recordar que el artículo 456 del Código del Trabajo dispone: *“...El tribunal apreciará la prueba conforme a las reglas de la sana crítica. Al hacerlo, el tribunal deberá expresar las razones jurídicas y las simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia, en cuya virtud les asigne valor o las desestime. En general, tomará en especial consideración la multiplicidad, gravedad, precisión, concordancia y conexión de las pruebas o antecedentes del proceso que utilice, de manera que el examen conduzca lógicamente a la conclusión que convence al sentenciador...”*.

El precepto transcrito permite concluir que las reglas de la sana crítica reclaman dos cosas al juzgador.



En primer lugar, el respeto de los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos y técnicos afianzados. En el mismo sentido, el autor Cristian Contreras expresa que: *“...el sistema se encuentra construido sobre el reconocimiento expreso de ciertas barreras limitantes al desborde de las atribuciones del sentenciador, las que clásicamente son el respeto de las reglas básicas impuestas por la lógica y las máximas de la experiencia, a las que los sistemas procesales chilenos del siglo XXI han agregado la observancia de los conocimientos científicamente afianzados...”* (Contreras Rojas, Cristian, El recurso de nulidad laboral como herramienta de control de las exigencias impuestas por la sana crítica a propósito de la sentencia rol 1068-2010 de la Corte de Apelaciones de Santiago en Revista de Derecho Universidad Católica del Norte, año 18, número 1, 2011, p. 271).

En segundo lugar, la expresión de las razones que le han conducido a asignar valor o a desestimar las pruebas rendidas, de manera que el examen conduzca lógicamente a la conclusión que convence al sentenciador. Al respecto, don Enrique Barros explica que: *“...la apreciación de conformidad con la sana crítica exige del juez la explicación de las circunstancias concretas que le permiten llegar al convencimiento en la determinación de los hechos...”* (Barros Bourié, Enrique, Tratado de Responsabilidad Extracontractual, Editorial Jurídica de Chile, Santiago de Chile, 2006, p. 714). Esta segunda exigencia implica, necesariamente, que previamente el juzgador señale las pruebas relacionadas con la acreditación de los hechos debatidos.

En consecuencia, sólo si la sentencia transgrede los principios de la lógica, las máximas de la experiencia o los conocimientos científicos o técnicos afianzados, o si carece de las razones que le conduzcan a asignar valor a unas pruebas y a desestimar otras de modo que su razonamiento no conduce naturalmente a la decisión adoptada, será posible acoger la nulidad solicitada.



Este es el modo acertado de entender el recurso de nulidad laboral, pues no sólo evita que, en un extremo, esta Corte valore la prueba rendida transformando aquella vía de impugnación en un recurso de apelación como el de antaño, sino también que, en el otro extremo, la causal del artículo 478, letra b), del Código del Trabajo carezca de aplicación práctica.

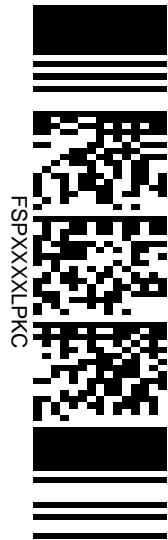
UNDÉCIMO: Para sostener esta causal de invalidación, se recurrente arguye que el juzgador infringió las normas de apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, vulnerando la lógica, en específico de la razón suficiente, para cuyo fin transcribe el motivo noveno del fallo refutado.

DUODECIMO: El recurrente en su libelo, además de no precisar cuáles reglas valoración de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica han sido infringidas en el fallo, no repara en la impropiedad de esta causal de invalidación, por cuanto el artículo 297 del Código Laboral establece en forma precisa e indubitada que el juez al conocer de la disolución de una organización sindical deberá fallar en única instancia, sin forma de juicio, oyendo al directorio de la organización respectiva, o en su rebeldía, y si estima del caso, **recibirá la causa a prueba, la que debe apreciar en conciencia**, vale decir, no son aplicables las reglas de la sana crítica.

DÉCIMO TERCERO: Necesario es señalar que el “valorar la prueba en conciencia, significa que no hay parámetros de valoración de los medios probatorios, basta que alguno de las probanzas produzca certeza en la esfera íntima del juez, y este exprese tal circunstancias.

Es el juzgador quien en su íntima convicción, hace la ponderación comparativa de los medios de prueba sin regla legal alguna que le limite en esa personal convicción, para llegar a una decisión, bastando solo que exprese las razones.

DÉCIMO CUARTO: La señora jueza de primer grado, en su motivo séptimo, del fallo en estudio, señala que la prueba debe valorarse en conciencia conforme lo dispone el artículo 297 del código del ramo para en seguido en un extenso considerando, como es el octavo hacer un detallado y



acabado análisis de toda la prueba existente, abarcando más de cuatro fojas sus motivaciones racionales para concluir acreditada la alegación del actor en la causa y con ello acceder a la petición de disolución de la agrupación sindical al no cumplir la exigencia legal de quórum, del modo como se alegó por el actor.

III.- Causal del artículo 478 letra e) del Código del Trabajo en relación con los números 5 y 6 del artículo 459 del mismo Código.

DÉCIMO QUINTO: Que, en subsidio de la causal antes analizada, el recurrente de autos dedujo la causal de invalidación contemplada en el artículo 478 letra e), esto es, cuando la sentencia se hubiere dictado con omisión de cualquiera de los requisitos establecidos en el artículo 459, los que concreta en los numerales 5 y 6 de este último precepto.

DÉCIMO SEXTO: El solicitante como fundamentos de su pretensión en relación con esta causal expone lo siguiente: *“por haber otorgado más de lo pedido por las partes, toda vez que, sin que ninguna de las partes lo pidiera como defensa ni como excepción, resolvió arbitrariamente que no existió práctica antisindical, no obstante que el mismo tribunal conoce de una causa acogida a tramitación la Rol S-1-2022 en la cual aún no se ha determinado aquello y lo que no le correspondía hacerlo en esto autos.*

Por último, SS., es dable hacer presente además, que al decir de la Excelentísima Corte Suprema en la causa Rol 22.339-2014, “La causal de nulidad se configura cuando el juez en el proceso de valoración de la prueba arriba a conclusiones ostensiblemente irracionales, insensatas, parciales o incoherentes; razón por la que para acoger ese motivo de nulidad se requiere acreditar una equivocación clara y evidente en el juicio valorativo del órgano jurisdiccional” como lo ha acreditado y sostenido esta parte en este juicio y fallo recurrido, vale decir, la calificación improcedente de los hechos que fueron probados, y de no mediar dicha decisión o si el tribunal de no haber existido el vicio que funda el presente recurso, debió necesariamente rechazar la demanda en todas sus partes, con expresa condenación en costas.”



DÉCIMO SÉPTIMO: Al respecto, cabe señalar que el peticionario no desarrolla debidamente esta causal en examen, ya que menciona un supuesto vicio de ultrapetita, pero no lo explicita adecuadamente y pretende volver sobre un asunto ya resuelto en la sentencia, por cuanto, en el párrafo final del motivo octavo, la sentenciadora señaló al respecto: *“(…) como la recién iniciada causa Rit S-1-2022, aparecen como reacciones ubicadas en meses posteriores frente al actuar del órgano fiscalizador al plantear éste la denuncia de esta causa y que tuvo como antecedente la petición de marzo de 2021 del empleador, lo que hace que la prueba del requerido refrende la idea de efectivo actuar o devenir de la organización sindical antes de la petición del empleador que se expone en el informe fiscalizador (documento e) del demandado y lo concluido ante la petición de esta materia también está el complemento de esta actividad.*

Todo lo expuesto y analizado conduce a la conclusión que en la especie la requerida no cumple con los requisitos quórum exigido por legislador en el artículo 227 código del trabajo y en relación con el artículo 297 del mismo texto, permite estimar acreditada en juicio la alegación del actor de esta causa y que con ello es procedente acceder a la petición de disolución de la agrupación sindical al no cumplir la exigencia legal de quórum del modo como se ha alegado por el actor, por ello se hará lugar al requerimiento o demanda de esta causa, como se dirá en lo resolutivo de esta decisión.”

DÉCIMO OCTAVO: Un examen acabado de la sentencia recurrida permite constatar que la misma no infringe la norma invocada como causal de anulación, ya que contiene los preceptos legales, los principios de derecho o de equidad como la resolución expresa del asunto sometido a su conocimiento, y la alegación sobre una causa ingresada con posterioridad a los hechos que dieron motivo a la disolución del sindicato no resultan pertinentes, puesto que esa denuncia no es más que tal como lo dice la sentenciadora *“(…) una reacción situada en meses posteriores frente al actuar del órgano fiscalizador al plantear éste la denuncia de esta causa y*



que tuvo como antecedente la petición de marzo de 2021 del empleador, lo que hace que la prueba del requerido refrende la idea de efectivo actuar o devenir de la organización sindical antes de la petición del empleador que se expone en el informe fiscalizador (documento e) del demandado y lo concluido ante la petición de esta materia también está el complemento de esta actividad.”

DÉCIMO NOVENO: Por último, deben considerarse que el fallo recurrido de nulidad se encuentra debidamente fundado por la jueza *a quo*, de todo lo cual esta Corte se permite concluir que no existiendo motivo de reproche respecto de la sentencia cuestionada y sus fundamentos, como se ha venido razonando, no concurriendo en la especie ninguna de las hipótesis de invalidación alegadas en el recurso de nulidad y a las cuales nos hemos referido latamente en esta resolución, dicho arbitrio no está en condiciones de ser acogido por lo que se rechazará en todos sus capítulos.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 474, 477 y 482 del Código del Trabajo, SE DECLARA QUE:

I.- SE RECHAZA el recurso de nulidad deducido por el abogado señor Juan Alexis Castillo Peña en representación del SINDICATO DE TRABAJADORES DE EMPRESA COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA”, en contra de la sentencia definitiva pronunciada con fecha cinco de abril de dos mil veintidós por la jueza titular, doña Fabiola Elena Villalón Gallardo, **la que NO ES NULA.**

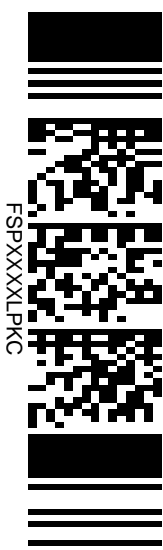
II.- Que no se condena en costas a la entidad requirente, por estimarse que ha tenido motivo plausible para litigar.

Redacción del Ministro don Pablo Bernardo Krumm de Almozara

Regístrese y devuélvase.

NºLaboral - Cobranza-96-2022.





FSPXXXXLPRC

Pronunciado por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Copiapó integrada por Ministro Presidente Pablo Bernardo Krumm D., Fiscal Judicial Maria Jose Hernandez S. y Abogado Integrante James Cristian Richards G. Copiapo, veintinueve de junio de dos mil veintidós.

En Copiapo, a veintinueve de junio de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

